

INE/CG1492/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JUAN LÓPEZ BLANCO, OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE GUADALUPE, SAN LUIS POTOSÍ, POSTULADO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP**.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El primero de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número CEEPC/SE/3414/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de San Luis Potosí, a través del cual remite el Acuerdo de fecha diecinueve de julio del año en curso, dictado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el cual en su Punto de Acuerdo Primero, se ordena remitir el escrito de queja suscrito por el C. Delfino Quiroz Cruz, en su carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal Electoral de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, en contra del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal postulado por el Partido de la Revolución Democrática, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, por supuestos gastos no reportados, así como un posible rebase de topes de gastos de campaña por parte del otrora candidato, el C. Juan López Blanco.

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“(…)

HECHOS:

1.-Con fecha 06 de mayo del 2018, se llevó a cabo el arranque de campaña del Candidato a Presidente Municipal del PRD Juan López Blanco, en la plaza principal de Villa de Guadalupe, S.L.P. iniciando aproximadamente a las 5 de la tarde, dando a conocer mencionado evento en su perfil de Facebook de nombre Juan López Blanco.

*2.- Evento del cual puedo apreciarse de forma evidente y clara por su servidor y por muchas personas que asistieron al mismo, siendo que fue público y masivo. Por lo tanto, se pudo ver que fue costoso, ya que como se pudo observar, el candidato mencionado conto con el siguiente equipo de música y sonido: **audio, escenario, pantallas, grupo musical, banda musical, mariachi y animadores en el evento. También a la gente que asistió le dieron comida y bebida.***

3.-Así las cosas, el arranque de campaña dio inicio aproximadamente a las 5:00 pm para terminar aproximadamente a las 2:00 am, siendo que fue un evento que permaneció durante 9:00 horas, lo cual incrementa su costo, por lo que aproximadamente y según los gastos realizados ascienden aproximadamente a \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/N). Siendo esto motivo de que deja a los demás candidatos en desigualdad por el tope de campaña, particularmente a la candidata del partido al cual represento, ya que se esta violando los dispositivos relacionados con los gastos y el tope de campaña que marca la Ley Electoral del Estado de S.L.P.

*4.- Así mismo me he percatado de que existe en todo el municipio un número considerable de bardas que están pintadas con el logotipo del PRD a nombre del candidato **JUAN LOPEZ BLANCO**, así como un número importante de pendones y mantas, sí bien es cierto en el puro arranque de campaña aproximadamente se erogaron \$150,000.00 (CIENTO CIENCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), con esto ya se rebasó el tope de campaña, ahora bien, sumándoles las bardas, mantas, pendones y calcomanías, añadiendo todo esto*

ya excedería de manera desmedida y evidente el gasto total del tope de campaña del candidato del PRD Juan López Blanco.

(...)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:

- **PRUEBA TÉCNICA (VIDEO Y AUDIO, C´D – DVD).** Consistente en un disco compacto original que contiene 2 videos con audio, en uno de ellos se aprecia una grabación de elementos que en ningún punto tiene relación con los hechos denunciados en el procedimiento en el que se actúa, ya que se muestra a un menor de edad bailando, dicha probanza resulta insuficiente y notoriamente inverosímil para acreditar su dicho; en el segundo video se aprecia una grabación de un evento de campaña que llevó a cabo el candidato a presidente municipal de Villa de Guadalupe por el PRD Juan López Blanco, sin que del mismo se desprendan circunstancias de tiempo y lugar.
- **PRUEBA TÉCNICA.** Consiste en una impresión a color de una página de Facebook a nombre de Juan López Blanco, de fecha 4 de mayo del 2018, donde se puede apreciar la publicidad y el grupo que asistirá al arranque de campaña.
- **PRUEBA TÉCNICA.** Consistente en una impresión a color de una página de Facebook a nombre del Juan López Blanco, de fecha 2 de mayo del 2018.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP**, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, así como notificar al partido político y al otrora candidato denunciados remitiéndoles las constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 34 a 35 del expediente)

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

a) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión

del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 36 del expediente)

b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 37 del expediente)

V. Notificación de inicio de queja al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41358/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de mérito. (Foja 38 del expediente)

VI. Notificación de inicio de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41357/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento administrativo de mérito. (Foja 39 del expediente)

VII. Notificación de inicio de procedimiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41359/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 40 y 41 del expediente)

VIII. Notificación de inicio de procedimiento al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41361/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 42 y 43 del expediente)

b) Mediante escrito de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del Partido De la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 44 a 57 del expediente)

“(…)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que se no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por parte de la quejosa, en todo momentos son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdadero9os o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealdad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan , a

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, el asunto de que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Juan López Blanco, candidato a presidente Municipal del Villa de Guadalupe, estado de san Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

De esta manera, es pertinente manifestar que el evento celebrado el 6 de mayo del 2017, que se denuncia en el asunto que nos ocupa, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", reporte que se efectuó a través en el PERIODO DE OPERACIÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA: 1, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCION DE LA PÓLIZA: RSES-11 APORTACIÓN DE HUGO NULEZ A CANDIDATO, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, OTROS GASTOS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, RSES-111 APORTACIÓN DE NULEZ A CANDIDATO, DESCRIPCIÓN: BANDA MUSICAL, SONIDO Y TEMPLETE, instrumento jurídico contable que a continuación se reproduce para mayor referencia:

(imagen)

A la póliza en comento se adjuntó la evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercido, misma que consistió en:

• Formato "RSES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑA FEDERAL/LOCAL, número 0111, de fecha 6 de mayo del 2018, emitido a favor de Hugo Muñoz Hernández, por concepto de aportación de escenario y grupo, mismo que a continuación se reproduce, para mayor referencia:

(imagen)

- *Evidencia fotográfica del bien aportado*

(imagen)

- *Credencial para votar emitida a favor del C. Hugo Núñez Hernández*

(imagen)

Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.

Es mérito de lo anterior, es importante destacar que, si bien es cierto se llevó a cabo el evento denunciado, también lo es que el mismo no se llevó a cabo en la forma y en los términos que lo pretende hacer valer la parte quejosa.

En este sentido, se informa que al evento que, al evento en comento, solo se presentó un grupo musical, el cual, se encuentra debidamente reportado, y se utilizó un escenario, mismo que, también se encuentra debidamente reportado ante la autoridad fiscalizadora.

Por lo que se niega categóricamente la existencia de los demás gastos de manera infundada y sin ofrecer algún medio de prueba imputa el quejoso, consistentes en audio, pantallas, banda musical, mariachi, animador de eventos, comida y bebidas, no realiza las especificaciones cuantitativas y cualitativas de cada uno de los objetos de gastos que acusa, y más aun no exhibe algún medio de prueba idóneo con la que acredite los extremos de sus acusaciones.

*En este sentido, no pasa pro desapercibido que, en el escrito inicial de queja, como prueba el denunciante argumenta ofrecer como prueba (VIDEO Y AUDIO CD-DVD), prueba técnica que desde este momento, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le presenta dar**, toda vez que suponiendo sin conceder que existiera dicha probanza, en primer lugar, no se le corrió traslado a mi presentado para que se pronunciara sobre su contenido.*

En segundo lugar, respecto de dicha probanza, en el supuesto no concedido de su existencia, el quejoso, omite dar cabal cumplimiento a las premisas legales para su procedencia, pues deja de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo tiempo que reproduce la prueba, es decir, deja de realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, requisito

que es indispensable, para realizar una vinculación de la prueba con los hechos denunciados.

Pues si es sabido que las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, como lo es la que se objeta en cuanto su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar en el asunto que nos ocupa, debe ofrecerse con una descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretende probar, premisas de procedencia que en la especie no se cumplen.

(...)

Igual suerte corre lo relativo a las supuestas pintas de bardas que denuncia la parte actora en el asunto que nos ocupa, imputación que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, conforme a lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, lo cual, se solicita que se tenga por reproducido en este acto como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal.

Así mismo, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que la imputación vertida por el quejoso, es genérica, vaga e imprecisa, pues no indica:

- El número de supuestas pintas de bardas.*
- Las características cualitativas de las supuestas pintas de bardas.*
- Los domicilios en que se encuentran colocadas las supuestas pintas de bardas.*

Más aún, no ofrece algún medio de prueba idóneo con la que se acredite la existencia de al menos 1 punta de barda, de las que denuncia.

*De igual manera, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar** a los supuestos costos que indique el quejoso, tanto del evento celebrado el 6 de mayo del 2018, el cual, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, como a las supuestas pintas de bardas denunciadas, importes que a todas luces son excesivos e irreales conforme a los precios de mercado.*

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que, lo manifestado por el quejoso en el asunto que nos ocupa, solamente se le debe considerar como

argumentaciones subjetivas sin sustento legal; siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador.

(...)"

IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal, postulado por el Partido de la Revolución Democrática.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/750/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el expediente, a efecto que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba el presente oficio, conteste por escrito lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que estime convenientes. (Fojas 58 a la 67 del expediente)

b) Mediante escrito de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 68 a la 81 del expediente)

"(...)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados, dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por parte de la quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al

proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo, tiempo , lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

(...)

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del suscrito C. Juan López Blanco, candidato a presidente Municipal del Villa de Guadalupe, estado de san Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable.

De ésta manera, es pertinente manifestar que el evento celebrado el 6 de mayo del 2017, que se denuncia en el asunto que nos ocupa, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, reporte que se efectuó a través en el PERIODO DE OPERACIÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA: 1, TIPO DE PÓLIZA: NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO, DESCRIPCION DE LA PÓLIZA: RSES-11 APORTACIÓN DE HUGO NULEZ A CANDIDATO, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, OTROS GASTOS, DIRECTO, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, RSES-111 APORTACIÓN DE NULEZ A CANDIDATO, DESCRIPCIÓN: BANDA MUSICAL, SONIDO Y TEMplete, instrumento jurídico contable que a continuación se reproduce para mayor referencia:

(imagen)

A la póliza en comento se adjuntó la evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercido, misma que consistió en:

- *Formato “RSES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑA FEDERAL/LOCAL, número 0111, de fecha 6 de mayo del 2018, emitido a favor de Hugo Núñez Hernández, por concepto de*

aportación de escenario y grupo, mismo que a continuación se reproduce, para mayor referencia:

(imagen)

- *Evidencia fotográfica del bien aportado*

(imagen)

- *Credencial para votar emitida a favor del C. Hugo Núñez Hernández*

(imagen)

Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.

Es mérito de lo anterior, es importante destacar que, si bien es cierto se llevó a cabo el evento denunciado, también lo es que el mismo no se llevó a cabo en la forma y en los términos que lo pretende hacer valer la parte quejosa.

En este sentido, se informa que al evento que, al evento en comento, solo se presentó un grupo musical, el cual, se encuentra debidamente reportado, y se utilizó un escenario, mismo que, también se encuentra debidamente reportado ante la autoridad fiscalizadora.

Por lo que se niega categóricamente la existencia de los demás gastos de manera infundada y sin ofrecer algún medio de prueba imputa el quejoso, consistentes en audio, pantallas, banda musical, mariachi, animador de eventos, comida y bebidas, no realiza las especificaciones cuantitativas y cualitativas de cada uno de los objetos de gastos que acusa, y más aun no exhibe algún medio de prueba idóneo con la que acredite los extremos de sus acusaciones.

*En este sentido, no pasa pro desapercibido que, en el escrito inicial de queja, como prueba el denunciante argumenta ofrecer como prueba (VIDEO Y AUDIO CD-DVD), prueba técnica que, desde este momento, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le presenta dar**, toda vez que suponiendo sin conceder que existiera dicha probanza, en primer lugar, no se le corrió traslado a mi presentado para que se pronunciara sobre su contenido.*

En segundo lugar, respecto de dicha probanza, en el supuesto no concedido de su existencia, el quejoso, omite dar cabal cumplimiento a las premisas legales para su procedencia, pues deja de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo tiempo que reproduce la prueba, es decir, deja de realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, requisito que es indispensable, para realizar una vinculación de la prueba con los hechos denunciados.

*Pues si es sabido que las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, como lo es la que se objeta en cuanto su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar en el asunto que nos ocupa, debe ofrecerse con una descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretende probar, premisas de procedencia que en la especie no se cumplen.
(...)*

Igual suerte corre lo relativo a las supuestas pintas de bardas que denuncia la parte actora en el asunto que nos ocupa, imputación que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, conforme a lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, lo cual, se solicita que se tenga por reproducido en este acto como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal.

Así mismo, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que la imputación vertida por el quejoso, es genérica, vaga e imprecisa, pues no indica:

- El número de supuestas pintas de bardas.*
- Las características cualitativas de las supuestas pintas de bardas.*
- Los domicilios en que se encuentran colocadas las supuestas pintas de bardas.*

Más aún, no ofrece algún medio de prueba idóneo con la que se acredite la existencia de al menos 1 punta de barda, de las que denuncia.

*De igual manera, **se objeta en todo su contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda dar** a los supuestos costos que indique el quejoso, tanto del evento celebrado el 6 de mayo del 2018, el cual, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, como a las supuestas pintas de bardas denunciadas, importes que a todas luces son excesivos e irreales conforme a los precios de mercado.*

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que, lo manifestado por el quejoso en el asunto que nos ocupa, solamente se le debe considerar como argumentaciones subjetivas sin sustento legal; siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador.

(...)”

c) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/798/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, notificó la solicitud del requerimiento de pruebas del procedimiento al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, para que ofrezca y exhiba las pruebas que estime convenientes.

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (DAPPAPO).

a) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/1162/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara el número de póliza en la cual fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, el evento de campaña denunciado, celebrado por el C. Juan López Blanco, candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, así como los gastos del mismo. (Fojas 84 y 85 del expediente)

b) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/3075/18 la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación a lo solicitado anexando copia simple de la póliza PD-2/06-2018, en donde se encuentran registrados los gastos por concepto de banda musical, sonido y templete. (Fojas 86 a la 94 del expediente)

c) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1195/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informe el número de póliza en la cual se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, los gastos por concepto de pantalla, mariachi, animadores y alimentos y bebidas. (Foja 97 del expediente)

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

d) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/3119/18 la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación a lo solicitado. (Fojas 98 a la 100 del expediente)

e) El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/1347/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informe si derivado del monitoreo realizado durante el periodo de campaña se localizaron bardas o propaganda colocada en vía pública correspondiente al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe.

XI. Razones y Constancias.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación del registro de los gastos por concepto de realización del evento denunciado dentro del expediente que en esta vía se resuelve, evento que a dicho del denunciante, beneficio a la campaña del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), **registro del evento, a través del perfil de dicho candidato, relacionado con la Contabilidad 54551, identificador 00004, con el nombre “Arranque de Campaña”.** (Fojas 82 y 83 del expediente)

b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de los gastos, los cuales fueron denunciados dentro del expediente que en esta vía se resuelve, mismos que a dicho del denunciante, beneficio a la campaña del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), **registro de banda musical, sonido y templete a través del perfil de dicho candidato, relacionado con la Contabilidad 54551, con el número de póliza 1.** (Fojas 95 y 96 del expediente)

c) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de los gastos, los cuales fueron denunciados dentro del expediente citado al rubro, mismo que beneficiaron a la campaña del C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad

Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), **registro de lonas a través del perfil de dicho candidato, relacionado con la Contabilidad 54551, con el número de póliza 2.** (Fojas 101 y 102 del expediente)

d) El diez de septiembre de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de verificar si la página de la red social denominada Facebook del C. Juan López Blanco es oficial, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo la dicha red social el perfil del candidato, dando como resultado que no es oficial la página. (Fojas 103 y 104 del expediente)

e) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó Razón y Constancia a efecto de realizar la búsqueda y verificación de gastos por concepto de pinta de bardas, mismas que beneficiaron la campaña del C. Juan López Blanco otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizo dentro del Sistema de Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), **que no existe registro alguno del concepto de pinta de bardas.**

XII. Solicitud de información al C. Hugo Núñez Hernández. Mediante acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral, realice lo conducente a efecto de notificar el oficio a efecto de que en un plazo improrrogable de cinco días a partir de que reciban respectiva, formulen por escrito lo que a su derecho convenga.

XIII. Acuerdo de alegatos. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 105 del expediente)

XIV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43924/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento citado al rubro. (Fojas 106 y 107 del expediente)

XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43925/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que manifestara por escrito los alegatos que considere convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento citado al rubro. (Fojas 108 y 109 del expediente)

b) Mediante oficio de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización la contestación de alegatos del Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 110 a la 115 del expediente)

XVI. Notificación de alegatos al C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática.

a) Mediante acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí del Instituto Nacional Electoral, realice lo conducente a efecto de notificar la apertura de alegatos al C. Juan López Blanco, a efecto de que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que reciban respectiva, formulen por escrito sus alegatos, exponiendo lo que a su derecho convenga (Fojas 116 y 117 del expediente)

XVII. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Foja 119 del expediente).

XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Extraordinaria Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en lo general, por votación unánime de los presentes, las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Benito Nacif Hernández y en lo particular, por cuanto hace al concepto de gasto denominado “pantalla”, fue aprobado con tres votos a favor de los presentes y uno en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y

cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017¹; INE/CG614/2017² e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizando todos los documentos y actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el **fondo** del presente asunto, se constriñe en determinar si el Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco, omitieron reportar gastos por concepto de la realización de un evento de campaña celebrado el día seis de mayo de dos mil dieciocho, así como los gastos erogados por concepto de bardas, pendones y mantas, y por ende un posible rebase de gastos de campaña.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización; que a la letra disponen lo siguiente:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 243.

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

¹ Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

² Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

(...)

4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

(...)

b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y

II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte.”

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

(...)

f) Exceder los topes de gastos de campaña; (...).”

“Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(...)

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (...).”

Ley General de Partidos Políticos

(...)

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(...)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.

(...).”

“Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96.

Control de ingresos.

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser

reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

“Artículo 127.

Documentación de los egresos.

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

(...)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.

En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de la actividad antes indicada.

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los gastos que se realicen.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización deberán analizarse, administrarse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, el nueve de agosto de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de queja de referencia.

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatará la existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura denunciada, a fin de determinar el registro³ de las erogaciones conducentes.

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en los artículos 83, numerales 2, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el Partido Revolucionario Institucional, así como de su candidato.

Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y legalmente permitidos.

3 Así, bajo el supuesto de omisión de registro, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado en el evento de campaña un beneficio al C. Oscar Bautista Villegas, candidato a Diputado Federal por el distrito 03 en el estado de San Luis Potosí, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, serán sumadas a su informe relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos carecen de objeto partidista para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen.

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio a la libertad del sufragio, por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

- 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
- 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente

con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no excedan del límite establecido.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la misma. Es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

El primero de agosto del dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja presentado por el C. Delfino Quiroz Cruz, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Comité Municipal de Villa Guadalupe, quien denunció que el Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí; el C. Juan López Blanco, omitieron reportar gastos por concepto de la realización de un evento de campaña celebrado el día seis de mayo del dos mil dieciocho así como gastos por concepto de bardas, pendones y mantas y por ende, un posible rebase de topes de gastos de campaña.

El quejoso señala en su escrito inicial que, derivado de la realización del evento de campaña denunciado, se desprenden gastos por concepto de audio, escenario, pantalla, grupo musical, mariachi y animadores, así mismo señala que a los asistentes al evento se les dieron alimentos y bebidas

Así mismo, en el escrito de queja el C. Delfino Quiroz Cruz, denuncia un supuesto gasto de campaña no reportado por concepto de un “**número considerable de bardas y un número importante de pendones y mantas**”, sin aportar mayores elementos de probanza más que su mención en el escrito de denuncia.

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad electoral analizará en dos apartados los conceptos denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el apartado será el siguiente:

- A. Gastos de campaña por concepto de realización del evento de campaña del 6 de mayo 2018.**
- B. Gastos de campaña por concepto de bardas, pendones y mantas.**

A. Gastos de campaña por concepto de realización del evento de campaña del 6 de mayo 2018.

En este apartado se analizará el hecho denunciado consistente en la realización de un evento de campaña que ha dicho del quejoso, tuvo verificativo el día seis de mayo del dos mil dieciocho el cual, a dicho del quejoso beneficio la candidatura del C. Juan López Blanco, el denunciante señala que en dicho evento se erogaron gastos por concepto de audio, escenario, pantalla, grupo musical, mariachi y animadores, así mismo señala que a los asistentes al evento se les dieron alimentos y bebidas

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Para sostener sus afirmaciones el quejoso anexó a su escrito dos imágenes de captura de pantalla, en una de ellas se puede observar una supuesta publicación en el perfil de Facebook de Juan López Blanco en la cual se hace una invitación al evento de arranque de campaña el domingo 6 de mayo del 2018 a las 17:00 horas en la casa de campaña del PRD para salir a realizar un recorrida a las calles de la comunidad; en la otra imagen se observa otra publicación de Facebook en la cual aparece únicamente una imagen del candidato con su nombre y el logo del PRD.

Así mismo adjunta un disco compacto el cual se encuentra rotulado como “*prueba 1*”, este contiene un video, en donde no se puede apreciar ningún elemento ni circunstancia que permitan probar la existencia de los gastos denunciados tales como audio, escenario, pantalla, grupo musical, mariachi y animadores, ya que se

muestra a un menor de edad bailando, dicha probanza resulta insuficiente y notoriamente inverosímil para acreditar su dicho.

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, el video relacionado en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/2014⁴, emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que: *“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieran contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretendan acreditar con estas”*

En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

En razón de lo anterior y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por el sujeto denunciado en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y a emplazar al C. Juan López Blanco, en su calidad de candidato Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática, en el estado de San Luis Potosí, los cuales fueron notificados a través de los oficios número INE/SLP/JLE/VE/750/2018 e INE/UTF/DRN/41361/2018, respectivamente.

⁴ **PRUEBAS TÉCNICAS, SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.** De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

En este mismo sentido, mediante oficio número INE/UTF/DRN/41359/2018, se le requirió al denunciante para que aclarara su escrito de queja y aportara mayores elementos y circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos de prueba respecto de la existencia de los hechos denunciados, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos así como la omisión de una narración expresa y clara o la ausencia de elementos probatorios, son obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos.

Ahora bien, en el caso concreto el quejoso no desahogó el requerimiento y no subsana la deficiencia de su denuncia, al omitir hacer una narración expresa y clara de los conceptos denunciados (evento de campaña del 6 de mayo, bardas, pendones y mantas), tampoco aportó elementos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran a esta autoridad dilucidar si los incoados incurrieron en una conducta infractora de la normativa electoral en materia de fiscalización.

No obstante, lo anterior, ésta autoridad electoral en ejercicio del principio de exhaustividad que rige su actuar y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y con el ánimo de allegarse mayores elementos que le permitieran esclarecer los hechos denunciados, procedió a realizar diversas diligencias para obtener elementos que le permitirán realizar un pronunciamiento en relación a los hechos denunciados, en razón de ello, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó mediante oficio número **INE/UTF/DRN/1162/2018** a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara si en sus registros se localizaba el reporte de los gastos erogados por el C. Juan López Blanco con motivo del evento de campaña de fecha 6 de mayo del 2018 y en su caso proporcionara el número de póliza en la cual fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, el mencionado evento de campaña, celebrado por el entonces candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

A lo cual, la referida Dirección de Auditoría, el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/3075/18 informó que el evento materia del presente curso, fue registrado por el sujeto denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el ID de Contabilidad número 54551, correspondiente al C. Juan López Blanco, así mismo remitió copia simple de la póliza **PD-2/06-2018**, en donde se encuentran registrados los gastos por concepto de **banda musical, sonido y templete**.

A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el registro del evento del cual se generaron diversos gastos no reportados por concepto de: **equipo de sonido, escenario, grupo musical**, se procedió a efectuar una nueva búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro de los conceptos especificados anteriormente, para lo cual, la autoridad electoral en fechas: trece de agosto, veinte de agosto y treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho levanto Razón y Constancia de las búsquedas realizadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados.

Debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad fiscalizadora, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Gastos	Documentación encontrada en el SIF	Agenda de Eventos
06 de mayo de 2018	"Arranque de campaña"	Villa de Guadalupe, San Luis Potosí	-Equipo de sonido - Escenario -Grupo Musical	-Evento registrado: identificador 00004, no oneroso, publico, "Arranque de campaña". -Equipo de sonido, escenario⁵, grupo musical: Póliza número 1, Periodo 2, normal, concepto: RSES-111 Aportación del C. Hugo Núñez Hernández.	Dicho evento fue registrado en la Agenda de Eventos en el SIF con el identificador 00004.

⁵ Cabe señalar que el quejoso denuncia el concepto de gasto de "pantalla" y como se observa en la documentación contenida en el SIF, específicamente en la evidencia, se observa que, en la fotografía cargada por el denunciado, se aprecia que en el escenario hay una pantalla, por tanto, este concepto se encuentra amparado en la póliza señalada en el cuadro.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

Fecha del evento	Evento	Lugar del evento	Gastos	Documentación encontrada en el SIF	Agenda de Eventos
					

En este sentido, de la información remitida por la Dirección de Auditoría así como de la información obtenida del SIF mediante Razón y Constancia se desprende que los conceptos de gasto denunciados consistente en el reporte del evento de arranque de campaña de seis de mayo del 2018, fue reportado en la agenda de eventos correspondiente asimismo señalo que los gastos vinculados con la realización del referido evento, consistentes en audio, escenario, pantalla y grupo musical, fueron reportados por el C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, en su informe de campaña correspondiente, razón por la cual, dichos conceptos de gasto fueron materia de revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí.

Por cuanto hace a los supuestos gastos no reportados por concepto de mariachi, animadores alimentos y bebidas la quejosa no señala ni aporta mayores elementos de que la simple mención en el escrito de queja.

Por lo que fue omisa en aportar los elementos idóneos de prueba que soportaran su aseveración, mismas que vinculadas con circunstancias de modo, tiempo y lugar dieran certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

De los conceptos anteriormente señalados, esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del entonces candidato y partido político denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que

concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la campaña del C. Juan López Blanco, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí y el Partido de la Revolución Democrática por los conceptos señalados

Lo anterior encuentra sustento en el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.**⁶

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no existen elementos que lleven a concluir que el C. Juan López Blanco, otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución Democrática hayan transgredido lo preceptuado en el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización motivo por el cual esta autoridad considera declarar **infundado** el presente apartado.

B. Gastos de campaña por concepto de bardas, pendones y mantas.

Respecto a estos conceptos el quejoso no aportó mayores elementos que la simple mención en su escrito de queja, sin señalar cantidades ni ubicaciones de las supuestas bardas, pendones y mantas con propaganda en favor del entonces candidato, el C. Juan López Blanco.

Por lo que fue omiso en aportar los elementos idóneos de prueba que soportaran su aseveración, mismas que vinculadas con circunstancias de modo, tiempo y lugar

⁶ Jurisprudencia 4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

dieran certeza a esta autoridad de los hechos que pretendió demostrar, por lo que la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos denunciados sean verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.

Ahora bien, derivado de la lectura al escrito de queja que nos ocupa, la autoridad fiscalizadora advirtió que por cuanto hace a los supuestos gastos no reportados por concepto de **bardas, pendones y mantas**, dicho escrito no aportaba circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionados con los conceptos denunciados y carecía de elementos probatorios que le permitieran a la autoridad trazar una línea de investigación, que le posibilitara realizar diligencias con la finalidad de acreditar o desmentir los hechos denunciados.

No obstante, lo anterior, la autoridad fiscalizadora solicito al quejoso mediante oficio INE/UTF/DRN/41359/2018 que aclarara su escrito de queja y aportara mayores elementos y circunstancias de modo, tiempo y lugar y, aportara elementos de prueba respecto de la existencia de las bardas y lonas denunciadas, fenecido el termino otorgado para tal fin, el denunciante no desahogo el requerimiento y no subsano la deficiencia de su denuncia, al omitir hacer una narración expresa y clara de los conceptos denunciados (bardas, pendones y mantas), tampoco apporto elementos ni circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran a esta autoridad dilucidar si los incoados incurrieron en una conducta infractora de la normativa electoral en materia de fiscalización

No obstante, lo anterior, esta autoridad, en apego y observancia al principio de exhaustividad que rige su actuar, procedió a revisar la documentación contenida en el Dictamen Consolidado, así como la Resolución correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, por cuanto hace a los gastos por concepto de pinta de bardas y de propaganda colocada en la vía pública, de dicha revisión, se obtuvo que en el referido documento, no se realizaron observaciones relacionadas con algún gasto reportado o la omisión de reportarlo por concepto de pinta de bardas, pendones o mantas así mismo mediante Razón y Constancia de fecha dieciséis de octubre del dos mil dieciocho, signada por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar que de una búsqueda realizada al Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), que derivado de los procedimientos de monitoreo realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización, no se localizaron bardas, pendones o mantas con propaganda a favor o que en su caso, beneficiara a la candidatura del C. Juan López Blanco.

Derivado de lo anterior y una vez que esta autoridad electoral valoro la totalidad de los elementos probatorios encontrados, se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza de la existencia de las supuestas bardas, pendones o mantas con propaganda en favor del otrora candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco, de las cuales se duele el quejoso y que dieron origen al procedimiento de mérito; en consecuencia, no es posible sostener que el partido político no tenía la obligación de reportar en su informe de campaña gasto alguno por concepto de la propaganda de mérito.

En las relatadas condiciones, y toda vez que no se desprende que las bardas, pendones o mantas, de las cuales se duele el quejoso existan, se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor del Partido de la Revolución Democrática y de su entonces candidato, el C. Juan López Blanco el principio jurídico *“Indubio pro reo”*, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente Jurisprudencia:

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo *“in dubio pro reo”* no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de *“in dubio pro reo”*, dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico *in dubio pro reo*. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. “

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.”

Cabe destacar, que el principio *in dubio pro reo*, en sentido negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se procesa a un individuo.

Asimismo, cabe advertir que el principio *in dubio pro reo* es un beneficio para el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el *ius puniendi* se encuentra imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria.

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, en relación con el 20

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. En este sentido, la máxima *in dubio pro reo* (presunción de inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8º, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la

imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

En consecuencia, del análisis de las constancias que obran en el expediente de mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad Técnica de Fiscalización, atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral federal concluye que **no se cuenta con certeza de que el Partido de la Revolución Democrática y su entonces candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco hubiesen omitido reportar en su informe de campaña egresos por concepto de propaganda o publicidad consiente en bardas, mantas, pendones, misma suerte que corren los conceptos consistentes en: grupo musical, alimentos y bebidas, pantalla;** por lo tanto, esta autoridad considera que no hay elementos que permitan afirmar que el partido político ni su otrora Candidato el C. Juan López Blanco, se hubieran beneficiado de los referidos gastos, mismos que dieron origen al presente procedimiento, por lo que no se acredita la vulneración a la normativa electoral en materia de fiscalización.

Se hace hincapié en que la imagen que acompaña al escrito de queja, la misma no arroja indicio alguno que permita determinar la existencia de los demás conceptos denunciados por lo que, en estricto cumplimiento a los principios rectores de la autoridad electoral, los de certeza, objetividad, inocencia y legalidad, consagrados en los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que únicamente se cuenta con una apreciación subjetiva del denunciante y una imagen proporcionada por el quejoso y en ésta no es posible advertir si correspondan o no al evento en estudio. Por lo que, al no existir un enlace lógico o nexo de causalidad entre el hecho que se conoce y el que se pretende conocer, ésta autoridad se encuentra imposibilitada para determinar la responsabilidad, por lo que hace a los conceptos en mención.

Aunado a que ésta autoridad no puede basar sus actuaciones en presunciones y sin contar con una prueba fehaciente, sobre todo si se trata de la imposición de alguna sanción, pues debe imperar el principio in dubio pro reo.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

En consecuencia y en base en los elementos aportados por el quejoso así como de los que se allegó la autoridad es de concluir que el Partido **Revolución Democrática** y su **y su entonces candidato a Presidente Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco**, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, por lo que respecta al presente apartado.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **el Partido de la Revolución Democrática, y su candidato a la Presidencia Municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, el C. Juan López Blanco**, en los términos del **Considerando 2 apartado A y B** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese al quejoso.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/687/2018/SLP

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al gasto de una pantalla en el evento de arranque de campaña, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**